

# LA BENEMÉRITA

REVISTA DE INFORMACIÓN PROFESIONAL

---

**Suplemento al núm. 26**

Enero de 1939

III Año Triunfal

VOLUMEN 12.º

---

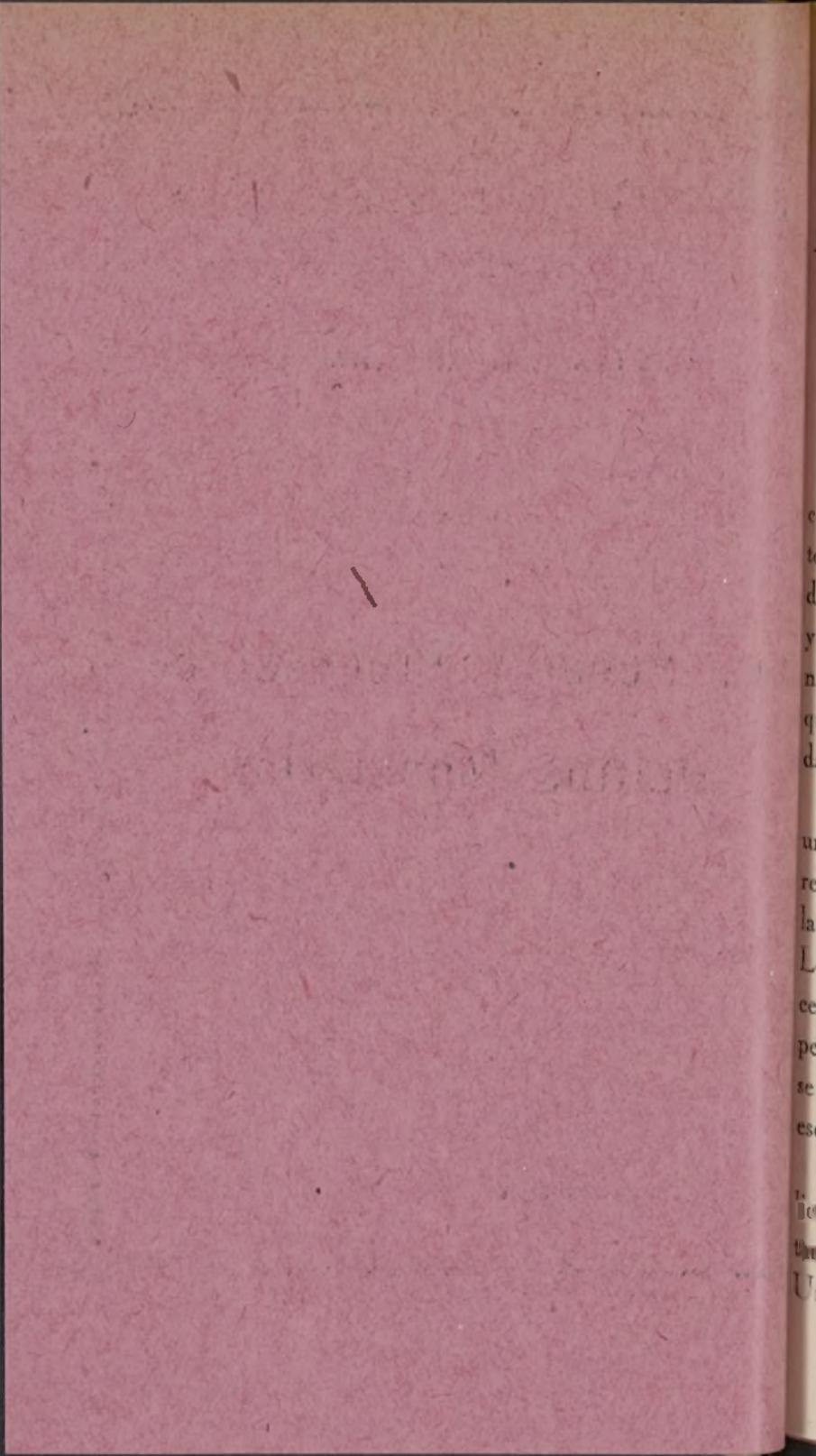
## Ley Penal y Procesal de Delitos Monetarios




Imp. y Enc. de la LIBRERÍA MODERNA. Santander

Ayuntamiento de Madrid







## LEY PENAL Y PROCESAL DE DELITOS MONETARIOS

DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1938

*Publicada en el Boletín Oficial del Estado, número 153*

El Decreto de 18 de noviembre de 1936, sobre creación del Comité de Moneda Extranjera, y el Decreto-Ley de 14 de marzo de 1937 y disposiciones concordantes, sobre cesión de divisas, oro en pasta o amonedado y títulos extranjeros o españoles de cotización internacional, han sido cumplidos, por modo general, en forma que manifiesta claramente una notoria colaboración ciudadana en ramo tan importante para la guerra.

Ello no excluye la necesidad jurídica de establecer un sistema punitivo que caiga sobre los infractores, para reparar el orden vulnerado. Y, si bien es cierto que en la Ordenanza de 29 de mayo de 1931 y en el Decreto-Ley citado se consignaban ya normas penales y aun procesales, no lo es menos que la experiencia aconseja un perfeccionamiento de dichas normas, y que no en vano se han referido a materia harto nueva y, por ende, de escasa tradición en nuestro derecho.

Es menester, en primer lugar, precisar las figuras delictivas, según la pauta que los hechos señalan en constante alteración de las previsiones que pudieran hacerse. Urge, también, introducir unidad en la definición gené-



— 2 —  
rica de los hechos delictivos y en la jurisdicción que de los mismos haya de conocer, cosas ambas que al presente se rigen por calificaciones y prescripciones diferentes.

Lograda la unidad de referencia, no podría olvidarse que, junto a los delitos de contrabando monetario, el Decreto-Ley de 9 de noviembre de 1936, creó la figura punible del atesoramiento de plata. De esta manera, existen dos especies de un mismo género delictivo, donde la unidad de doctrina legal y de jurisdicción sería completa, si no se comprendieran en el presente texto uno y otro aspecto con un afán sistemático, teniendo en cuenta, además, que la absorción de moneda fraccionaria de bronce y de cuproníquel, que producen los territorios liberados por virtud del estado de penuria en que salen del dominio marxista, origina un entorpecimiento en la circulación que es, a la vez, causa, por acción psicológica, de ulteriores atesoramientos de esas monedas, merecedores de correctivo.

El logro completo del fin que esta Ley persigue, exige, además, una integración en ella de los actos de tención del papel moneda enemigo, que el Decreto-veintisiete de agosto pasado ordenó retirar, y de aquellos otros que, en lo porvenir, puedan darse, sobre moneda que el Estado prive de curso legal.

Iniciado el camino de una revisión del derecho estatuto sobre los delitos monetarios, parece obligado prescribir un mínimo de normas relativas al período judicial de investigación, esclarecimiento y detención de los presuntos responsables.

Por todo ello, es de conveniencia pública la promulgación de la presente Ley, que, tendiendo a resolver los puntos aludidos en concordancia con las exigencias de la vida social, establece las garantías de previa definición de las faltas delictivas y de procedimiento, sin menoscabo de la figura jurídica rápida y ejemplar por virtud del funcionamiento de una especial Jurisdicción.

## TÍTULO PRIMERO

### *De la parte penal*

Artículo 1.º En virtud de la presente Ley, se tipificarán delitos de contrabando monetario las acciones que produzcan comisiones siguientes:

Primero.—No declarar, en los plazos y condiciones prescritos por la Administración, el oro, divisas y títulos comprendidos en el Decreto-Ley de catorce de marzo de mil novecientos treinta y siete.

Segundo.—Realizar o gravar bienes o derechos de cualquier clase, de los aludidos en el apartado anterior, sin consentimiento del Ministerio de Hacienda.

Tercero.—No depositar en lugar prescrito, no ceder, no poner a disposición del Estado, con infracción de lo ordenado por la Administración, el oro, divisas o títulos mobiliarios comprendidos en el Decreto-Ley de catorce de marzo de mil novecientos treinta y siete.

Cuarto.—Realizar importaciones en España, contra las normas vigentes debieran haber sido declarados, cesando o puestos a disposición del Estado.

Quinto.—No ceder al Comité de Moneda Extranjera, dentro de los ocho días siguientes a su adquisición, las divisas procedentes de exportaciones, rentas mobiliarias e inmobiliarias, remuneraciones de servicios y otras, y, en general, las que deriven de cualquier acto a título oneroso o lucrativo. El plazo de los ocho días se cuenta a partir de la fecha en que el adquirente reciba el cheque, abono en cuenta, título o documento que le conste que es poseedor de las divisas. Se exceptúan de lo dispuesto en el presente apartado, las exportaciones hechas en compensación autorizada con mercaderías extranjeras a importar a España.

Sexto.—Exportar mercaderías pactando el reembolso en pesetas.

Séptimo.—Ocultar a la Administración parte del valor que le deba ser declarado, depositado, cedido o puesto a su disposición por virtud de las normas en vigor.

Octavo.—Obtener créditos en divisas sin previa autorización del Comité de Moneda Extranjera.

Noveno.—Falsear, por exceso, el importe de las exportaciones con el exterior.

Décimo.—Obtener divisas del Comité de Moneda Extranjera, para pagos exteriores de todo género, mediante alegación de causa falsa, o, aplicar las divisas tenidas a fines distintos de los alegados.

Undécimo.—Exportar monedas extranjeras, billetes de Banco extranjeros, cheques, letras, pagarés, efectos, resguardos de depósito o títulos relativos a divisas, sin que medie autorización competente. Se exceptúan



Extrajida de billetes extranjeros, cheques o documentos cedidos por el Comité de Moneda Extranjera o de cuenta de éste.

Duodécimo.—Exportar monedas españolas de oro, plata, cuproníquel o bronce; billetes del Banco de España, cheques, letras, pagarés, efectos resguardos de depósitos o títulos relativos a pesetas. Se exceptúan las operaciones que puedan realizar los organismos del Estado.

Décimotercero.—Introducir en territorio nacional, sin permiso de Autoridad competente, monedas españolas de plata, cuproníquel o bronce, billetes del Banco de España, cheques, letras, pagarés, efectos, resguardos de depósito o títulos relativos a pesetas. Se reputará que no constituye delito la introducción en territorio nacional de cuanto en este apartado se enumera, si se hiciera declaración ante la Aduana, y sin perjuicio de la retención que proceda para dar efecto a la prohibición de entrada. La entrada por los frentes, fronteras o puertos, de billetes del Banco de España que lleven consigo los evadidos de zona enemiga, continuará sometida a las prescripciones de la Orden de 10 de julio de mil novecientos treinta y siete, y disposiciones complementarias. La introducción en territorio liberado de valores mobiliarios que estén comprendidos en la Orden de primero de abril de mil novecientos treinta y ocho, seguirá regulada por lo establecido en la mencionada disposición.

Décimo cuarto.—La apertura de créditos en pesetas a residentes en el extranjero, o a residentes en España por cuenta o con garantía de residentes en el extranjero sin

mediar autorización del Comité de Moneda Extranjera.

Décimo quinto.—La cesión a favor de residentes en el extranjero de créditos en pesetas, sin mediar autorización del indicado Comité.

Décimo sexto.—Los ingresos y abonos de pesetas en cuentas de residentes en el extranjero y la movilización del saldo de dichas cuentas sin autorización del indicado Comité.

Décimo séptimo.—Los pagos en pesetas por cuenta de residentes en el extranjero, sin mediar autorización del Comité citado.

Décimo octavo.—La venta de inmuebles sitos en España, títulos mobiliarios españoles o la participación en Sociedades españolas no anónimas otorgadas a residentes en el extranjero, mediante precio en pesetas y sin autorización del Comité de Moneda Extranjera.

Décimo noveno.—Las cesiones de cantidades de pesetas, bienes o derechos sitos en España a cambio de adquirir bienes o derechos sitos en el extranjero, sin consentimiento del referido Comité.

Vigésimo.—El comercio o tenencia de moneda metálica española que hubiere sido privada de curso sin perjuicio de lo prevenido con relación al oro anulado en el Decreto-Ley de 14 de marzo de 1937.

Vigésimo primero.—El comercio o tenencia de billetes del Banco de España que se reputan, puestos en circulación por el enemigo después del 18 de julio de 1936, en general, de cuanto papel moneda enemigo comprendido en el Decreto de 27 de agosto último, que preceptuó



Extranjera. No obstante, se reputará lícita la tenencia mientras no hayan transcurrido los plazos de entrega fijados en dicho Decreto.

Vigésimo segundo.—Cuantos actos, relacionados con el ramo de divisas, sean prohibidos, en lo sucesivo por Orden del Ministerio de Hacienda, que habrá de insertarse en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo segundo. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderán en vigor las normas relativas a excepciones que se contienen en el Decreto-Ley de 14 de marzo de 1937.

Artículo tercero. Se reputará delito de atesoramiento monetario la posesión de monedas metálicas españolas dotadas en curso legal, sean de plata, cuproníquel, bronce u otras aleaciones que en lo porvenir se pueden adoptar, en cantidad superior a la que en circunstancias normales justificarian la situación y en su abio de uso, los negocios del tenedor.

Artículo cuarto.—Son responsables de los delitos monetarios: Los autores, los cómplices y los encubridores. Para determinar el concepto en que sean responsables las personas a quienes se imputen delitos monetarios, se observan las reglas establecidas en el Código penal de 1937.

Artículo quinto.—Cuando las personas obligadas a declarar, ceder, depositar o poner a disposición del Estado oro, divisas, títulos, bienes o derechos, fueren menores o incapaces, la omisión delictiva será imputable a quienes sobre ellos tuvieron la patria potestad o el ejercicio de la tutela. Las omisiones delictivas de bienes o

derechos pertenecientes a la mujer casada, que deban ser declarados o entregados, se imputarán al marido cuando éste tuviere la administración de aquéllos. Si dichas omisiones se produjeren en sucesiones «mortis causa», sin haberse practicado todavía adjudicación de bienes, la responsabilidad recaerá sobre los albaceas o administradores judiciales, y si se tratase de sucesiones testadas sin designación de albaceas, sobre los herederos.

Artículo sexto.—La apreciación de las eximentes se hará por el Juez, ateniéndose a los preceptos del Código penal.

La apreciación de las atenuantes y agravantes la realizará el Juez, según los preceptos de dicho Código, simplemente, según los dictados de la conciencia, en función de las peculiaridades que concurren en cada caso.

Artículo séptimo.—A los autores del delito monetario se les sancionará con multa, que podrá llegar hasta el décuplo del importe del contrabando o del atesoramiento, y, si el Juez lo estimare justo, con la adición de prisión hasta el máximo de tres años.

Siempre que sea posible, y con independencia de las penalidades anteriormente prescritas, el Juez acordará el comiso de las cantidades o efectos que constituya la materia del delito.

El máximo de las penas que podrán imponerse a los cómplices y encubridores se fija, respectivamente, en la mitad y en la cuarta parte de los máximos aplicables a los autores.

El Juez gozará de libre arbitrio para imponer las pe-



que deriven de la presente Ley, con la única limitación de no exceder los máximos prefijados.

Artículo octavo.—Cuando figuren como responsables de los delitos monetarios elementos directivos, o empleados de Bancos, Establecimientos de crédito, Sociedades o personas jurídicas en general, por actos u omisiones realizados en el desempeño de su función, responderá siempre con carácter subsidiario la entidad a que pertenezcan, del pago de la multa exigida.

Si por insolvencia económica del condenado o de los que en su defecto deban responder conforme al párrafo anterior, no pudiera hacerse efectiva la multa impuesta, sufrirá aquél prisión subsidiaria, sin mengua de la prisión que como pena principal pueda imponerse, a razón de un día por cada diez pesetas que de la multa queden insatisfechas.

En ningún caso excederá la prisión subsidiaria el límite de un año de privación de libertad.

Artículo noveno.—En los casos de notoria importancia, en que por rebeldía voluntaria del inculpado no pudieran hacerse efectivas las sanciones impuestas, el Gobierno podrá acordar la privación de la nacionalidad española.

Artículo décimo.—Las multas que se impongan a consecuencia de la presente Ley, no serán condonables en ningún caso.

Artículo undécimo.—Las cantidades y efectos decomisados y las multas impuestas por la virtud de esta Ley, se ingresarán en el Tesoro público.

El Ministro de Hacienda podrá acordar la concesión de premios a los denunciantes, e investigadores y aprehensores, en cantidades que, globalmente, no excedan durante el ejercicio económico del cincuenta por ciento de las multas ingresadas.

## TÍTULO SEGUNDO

### *Del procedimiento*

Artículo duodécimo.—Los expedientes de investigación de hechos sancionados por esta Ley, se iniciarán de oficio o en virtud de denuncia.

La acción para denunciar los delitos monetarios es pública, y el escrito de denuncia podrá presentarse ante cualquier autoridad española civil o militar, que expedirá recibo y acusará el escrito al Comité de Moneda Extranjera, o a la Delegación provincial de Orden Público, según las reglas de competencia que se establezca en los dos artículos siguientes:

Artículo décimo-tercero.—Los expedientes de investigación y esclarecimiento de los delitos de contrabando monetario, con excepción de los comprendidos en los números veinte y veintiuno del artículo primero, serán incoados por la Administración del Comité.

A este fin, el Ministerio de Orden Público, a propuesta del Ministerio de Hacienda, adscribirá a dicho organismo los funcionarios necesarios del Cuerpo de Investigación y de Vigilancia. Sin perjuicio de esta colabo-



ración, la Administración del Comité podrá requerir directamente el concurso de las Aduanas, Servicios ordinarios de Policía, Delegaciones de Hacienda y, en general, la cooperación de las Autoridades civiles y militares.

Los funcionarios del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, adseritos al Comité de Moneda Extranjera, tendrán facultad de practicar detenciones cuando, a su juicio, o al de la Administración del Comité, concurrieren indicios de responsabilidad sancionada por la presente Ley.

De toda detención practicada deberá darse cuenta en el término de cuarenta y ocho horas, al Juzgado que se instituye por el artículo décimo-quinto, debiendo dicho Juzgado, en las cuarenta y ocho horas siguientes al conocimiento del hecho, confirmar o revocar la detención.

Los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior y los propios del Comité, o los que el Comité requiera por virtud de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, podrán practicar registros y examinar contabilidades, previa decisión de la Dirección del Comité de Moneda Extranjera.

Artículo décimo-cuarto.—El Ministerio de Orden Público, por medio de sus Delegaciones provinciales, cuidará de investigar los delitos de atesoramiento y los de contrabando comprendidos en los números veinte y veintiuno del artículo primero, instruyendo al efecto los oportunos expedientes.

Los funcionarios encargados de este servicio estarán a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo anterior en lo relativo a detenciones y registros, con exclusión de las facultades que en los mismos se conceden al Comité de Moneda Extranjera, que se entenderán vinculadas al Servicio Nacional de Seguridad. No obstante, ningún registro podrá ser realizado en las cajas de los Establecimientos de crédito, a los efectos de lo dispuesto en este artículo, sin previa autorización del Servicio Nacional de Banca.

Artículo décimo-quinto.—Se crea por la presente Ley el Juzgado de delitos monetarios, con facultad exclusiva y excluyente de conocer y fallar los expedientes que, refiriéndose a actos definidos en los artículos primero y tercero, remitan a su competencia la Administración del Comité de Moneda o el Ministerio de Orden Público. Dicho Juzgado se compondrá de un Juez, un Secretario y el personal auxiliar necesario, dependiendo, en lo gubernativo, del Ministerio de Hacienda.

El nombramiento del Juez se acordará libremente por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda.

Artículo décimo-sexto.—El Juez gozará de libertad procesal absoluta, con la única limitación de no condenar al que no fuese oído, salvo que mediare declaración de rebeldía. A estos efectos, si el paradero de los presuntos responsables fuese ignorado, se le citará por edicto publicado en el «Boletín Oficial del Estado», requiriendo la comparecencia en el término máximo que el Juez fije.



Transcurrido sin efecto el término fijado por el Juez, se declarará la rebeldía.

En virtud de la libertad procesal establecida en el párrafo anterior, el Juez podrá ordenar a la Administración del Comité o al Servicio Nacional de Seguridad, según la clase del delito, la práctica de nuevas diligencias o pruebas, o realizarlas por sí mismo. En todo caso, el Juzgado dejará constancia en el expediente de cuantas actuaciones promueva o realice con anterioridad al fallo.

Artículo décimo-séptimo.—Los expedientes remitidos al Juzgado, deberán ser fallados en el plazo máximo de sesenta días, contados a partir de la fecha de entrada del expediente en el Juzgado.

Artículo décimo-octavo.—La sentencia del Juez se redactará en la forma determinada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La sentencia se reputará firme en los siguientes casos:

a) De absolución.

b) De condena, por delito cuya materia sea de cuantía inferior a diez mil pesetas, o divisas equivalentes a esta cantidad, valoradas en pesetas al cambio oficial más alto.

Si la sentencia fuese condenatoria y se refiriese a suma mayor que la especificada en el párrafo anterior, sólo adquirirá carácter firme por el transcurso de los ocho días siguientes a la notificación a los interesados, sin que éstos hagan uso del recurso que concede el artículo 20.

Artículo décimo-noveno. Se instituye por la presente Ley el Tribunal de delitos monetarios que, dependiendo del Ministerio de Hacienda en lo gubernativo, se constituirá así:

Presidente: el Jefe del Servicio Nacional de lo Contencioso del Estado.

Vocales: un Jefe del Cuerpo Jurídico del Ejército o de la Armada, y un Magistrado de la carrera judicial.

Asistirá al Tribunal un secretario y el personal auxiliar necesario. Los vocales serán designados en Decreto acordado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda.

Artículo vigésimo. El Tribunal de delitos monetarios conocerá y fallará los recursos que se interpongan contra las resoluciones condenatorias del Juzgado, en asuntos de cuantía superior a diez mil pesetas. El recurso se presentará en el Juzgado, que deberá elevarlo al Tribunal junto con el expediente de su razón, en el término de tres días. El Tribunal sustanciará el recurso con libertad procesal absoluta, dictándose sentencia antes de los treinta días siguientes a la fecha de interposición. Contra la sentencia no se dará recurso alguno.



## DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los procedimientos en curso a la publicación de la presente Ley, por infracciones cometidas en relación con materia, se sustanciarán y fallarán por los organismos que fueren competentes con anterioridad a la publicación de la misma, los cuales deberán aplicar las prescripciones contenidas en ella, en cuanto resulten beneficiosas para los culpables.

## DISPOSICIONES FINALES

Primera. Queda autorizado el Ministerio de Hacienda: a) Para dictar las disposiciones convenientes al cumplimiento de lo establecido en los preceptos anteriores. b) Para excluir, mediante Orden Ministerial, de carácter general, una o varias figuras de delito de las determinadas en el presente texto. c) Para extender el delito de atesoramiento a los billetes del Banco de España. Para crear un régimen de excepción a las Sociedades españolas que tengan la totalidad de sus negocios en extranjero, en cuanto a las prohibiciones implícitas en el artículo primero de esta Ley resultaren inconvenientes al interés nacional. e) Para prorrogar, con carácter excepcional, los plazos marcados en el Título segundo, cuando mediare causa atendible.

Segunda. Se considerarán supletorios de la presente Ley, siempre que no contradigan lo establecido en la misma, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tercera.—Se entenderán sin efecto los preceptos contrarios a lo dispuesto en el precedente texto, el cual entrará en vigor a los quince días de su inserción en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, durante los treinta días siguientes a la referida inserción, podrá repatriarse, sin constituir delito, moneda española de bronce y cuproníquel. Lo establecido en la presente disposición no enerva los efectos de la amnistía regulada por la Ley de esta misma fecha.



pre-  
o en  
entos  
ptos  
eual  
en el  
e los  
a re-  
ron-  
osi-  
or la

Suscribiéndose a la revista

## LA BENEMÉRITA

coleccionará una gran biblioteca profesional sumamente práctica

## LA BENEMÉRITA

publica mensualmente dos números de 16 páginas y un folleto de máxima utilidad para el servicio

Contribuya con su peseta mensual a esta gran obra profesional y propáguela entre los compañeros



PRECIO DE SUSCRIPCIÓN: TRES PTAS. TRIMESTRAL

PAGO ADELANTADO POR GIRO POSTAL

Los gastos de giro a cargo del Suscriptor